

CUESTIÓN AGRARIA

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra

Oswaldo Coggiola*

Sus inicios

Hacia el final de la década del '70, en el principal estado sulista, los campesinos comenzaron a reivindicar tierras para trabajar. Ocuparon haciendas anteriormente expropiadas (Macali, Brillhante), intentaron ocupar una hacienda desocupada de titularidad dudosa; y, por último, decidieron acampar al lado de la carretera, exigiendo tierra en el estado. Surgía así el campamento de “Encrucilhada Natalino”, en Ronda Alta. Será en torno a esta lucha, y bajo el signo de las ocupaciones, que se estructurará, poco a poco, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en el estado de Rio Grande do Sul.

En el Estado de Paraná, los campesinos del oeste, que ya se habían organizado con un cierto éxito en la década del '50, al ser expropiados para construir la gran presa de Itaipú, articularon el Movimiento de los Sin Tierra del Oeste del Paraná (Mastro). Siguiendo este ejemplo, y apoyados en él, irán surgiendo otros Movimientos de los Sin-Tierra en otras regiones y estados del país. En Sao Paulo, el movimiento se organizará en torno a la resistencia y a la conquista de los arrendatarios de la Hacienda Primavera en Andradina. De forma similar, en Mato Grosso do Sul la lucha fue conducida por los arrendatarios que comenzaron a reivindicar tierras. Expulsados, acamparon en Itaqueraí. La tierra conquistada, después de duros y sacrificados esfuerzos, cerca de Cassilandia, era mala y sin condiciones de cultivo. Sin embargo, sería esa dura y fracasada experiencia la que llevaría a organizarse a los sin-tierra en el estado.

Con el empeño de articular a los diferentes Movimientos de Trabajadores Rurales Sin-Tierra de los estados del sur, que sienten la necesidad de organizarse, surgió el Movimiento de los Trabajadores Sin

El autor estudia el desarrollo de los Movimientos de trabajadores rurales sin tierra, su nacimiento, las tendencias ideológicas que confluyen en su seno y su crecimiento organizativo. Examina sus expectativas frente al gobierno del actual presidente brasileño y los progresivos desengaños, cuando se constató que el mismo privilegia las medidas favorables a la gran burguesía agraria.

* Profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil, militante del Partido Obrero y de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI)

Tierra del Sur. Conscientes de la importancia de una unidad nacional, se impulsaron los contactos regionales para crear una organización nacional de los sin-tierra. Tras un encuentro fundacional de enero de 1984, y otros encuentros parciales, se concretaría en el Primer Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra, que se celebró en Curitiba (Paraná) al que asistieron 1500 delegados, representando a todos los estados del Brasil.

En el cuadro del empantanamiento de la reforma agraria “oficial”, el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) surgió de una doble crisis: la del trabajo agrario de la Iglesia (Pastoral de la Tierra y CEBs) y del sindicalismo conciliacionista de la CONTAG, mayoritario en la década del '70. Teóricamente, eran miembros de la CONTAG todos los que no eran empleadores rurales, o sea, los asalariados, los pequeños productores, aparceros y arrendatarios, hasta los propietarios minifundistas. En la práctica, en cambio, sucedió otra cosa. Según João Pedro Stédile, principal dirigente del MST, “el MST existe hace más de 15 años. En un primer período (1979-1983), de retomada de la lucha por la tierra, ocurrieron ocupaciones y movilizaciones en muchas regiones, pero aisladas entre sí. Después de un proceso de mutuo conocimiento y articulación, se constituyó un movimiento nacional, con la realización de un encuentro nacional, en enero de 1984, en Cascavel (Paraná), con representantes de 16 estados”.¹

En el *Documento Político Básico* del MST se insistía en la importancia de la Iglesia en ese origen: “Tuvo un papel no sólo de apoyo o de aliada sino de dirección de las luchas. La CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), sus agentes, padres y hasta obispos, por su trabajo de concientización, capacidad intelectual e influencia de masas, y su vínculo directo con las luchas, asumieron durante cierto tiempo la dirección”. Dos ocupaciones, en 1979, dieron nombre al MST: “Por causa del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (Master) de Brizola y el PTB, la prensa local dijo: ilos sin tierra volvieron! Funcionó: fue la prensa que nos bautizó. Esas dos ocupaciones originaron el MST, el 7 de setiembre de 1979. En 3 o 4 meses, los agricultores fueron asentados y fue una gran victoria”.²

No fue un movimiento local sino nacional, el cual pasó al margen del sindicalismo conciliacionista existente: “Las luchas que marcaron el origen del MST fueron las ocupaciones de las glebas Macali y Brillante, en Ronda Alta (Río Grande do Sul) en 1979; la ocupación de la estancia Burro Branco, en Campo Erê (Santa Catarina) en 1980, el mismo año del conflicto en Paraná entre 10 mil familias y el Estado, por causa de la inundación de tierras con la construcción de Itaipú; en San Pablo, la lucha de los *posseiros* de Fazenda Primavera en Andradina, Castilho y Nova Independência; en Mato Grosso do Sul (Naviraí y Glória de Dourados), miles de arrendatarios desarrollaban una intensa lucha de

¹Stédile, João Pedro. A luta pela Reforma Agrária. *Revista ADUSP* n° 9, San Pablo, junio 1997.

²Stédile, João Pedro. O MST e a questão agrária. *Estudos Avançados* 11 (31), San Pablo, IEA-USP, 1997.

resistencia al desalojo. Otras luchas acontecían en Bahía, Río de Janeiro y Goiás”.³ Fue la lucha en San Pablo la que dio al MST notoriedad nacional: “El descubrimiento del Pontal de Paranapanema por el MST, una enorme área de asentamiento, con lugar para 25 mil familias, donde la propiedad no está siendo disputada en tribunales (pues ya fue probada la ilegalidad de la ocupación por los actuales hacendados) sino solamente el valor de la indemnización, trajo al MST a San Pablo, le dio cuerpo social y nitidez a los ojos de las elites políticas. El MST nació nacionalmente a partir de un hecho estadual”.⁴

El balance del MST, al cabo de su primer década de existencia, era impresionante, por el número de trabajadores sin tierra movilizadas y asentados. Aun así, los resultados obtenidos apenas arañaban la estruc-

Asentamientos de la Reforma Agraria en Brasil (1986-1996)

Región	Estados	Nº de Asent.	Nº de familias asentadas	Area (ha)
Norte	Acre	2	387	39.847
	Amazonas	2	1.221	135.544
	Amapá	1	153	7.760
	Pará	19	10.812	474.155
	Rondonia	3	1.347	70.645
	Roraima	3	949	102.579
	Tocantins	96	8.381	41.557
Nordeste	Alagoas	12	857	8.738
	Bahía	106	11.323	371.277
	Ceará	136	8.314	297.063
	Maranhao	136	26.685	1.040.506
	Paraíba	70	4.998	50.801
	Pernambuco	124	8.318	72.881
	Piauí	139	7.489	326.087
	Rio G. do Nrt.	60	5.265	110.602
	Sergipe	53	3.055	39.198
	Sudeste	Espírito Santo	34	1.131
Minas Gerais		37	3.454	138.591
Rio de Janeiro		47	3.701	32.456
Sao Paulo		48	5.462	97.531
Sur	Paraná	134	8.223	162.166
	Rio Grande do Sul	111	5.376	104.184
	Santa Catarina	77	2.281	48.203
Centro-Oeste	Goiás	51	3.114	167.984
	Mato Grosso do Sul	26	5.142	142.681
	Mato Grosso	37	7.734	774.197
Total		1.564	145.712	4.870.172

Fuente: INCRA y MST (Asentamientos realizados por el INCRA y los gobiernos estaduales hasta marzo de 1996)

³Fernandes, Bernardo M. Formação, especialização e territorialização do MST. In: STÉDILE, João P. (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997, p. 134.

⁴Navarro, Zander. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo. In: João P. Stédile (org.). *Op. Cit.*, p. 120.

tura de la gran propiedad fundiaria. Ambas características son visibles en el cuadro siguiente:

A 13 años de su fundación formal, el MST estaba organizado en 21 estados, donde ya asentó en ocupaciones de áreas ociosas a 138 mil familias, con 3,7 salarios mínimos mensuales promedio (el promedio brasileño es de 3,82 salarios mínimos por familia). De acuerdo con el MST, hasta 1996 se realizaron 1.564 asentamientos, ocupando un área de 4.870.171 hectáreas, con 145.712 familias.

Al mismo tiempo que privilegiaba la acción directa, hasta transformarse en sinónimo del “radicalismo intransigente” en el Brasil, el MST planteó su lucha en el marco legal de la Constitución de 1988. El gobierno Sarney (1985-1990) fijó el objetivo de asentar 1,4 millón de familias, pero sólo lo hizo con 90 mil, en una hipótesis optimista, o sea 6% de su objetivo. El gobierno de Fernando Collor de Mello (1990-1992) prometió 500 mil asentamientos, pero frenó la inscripción de nuevas tierras y las desapropiaciones: sólo 23 mil familias recibieron nuevos títulos. El gobierno de Itamar Franco (1992-1994) prometió menos todavía: 20 mil en 1993 y 60 mil en 1994, y benefició a apenas 12.600 en los dos años. Fernando Henrique Cardoso (FHC) prometió en campaña 400 mil títulos, que redujo a 260 mil después de elegido, y se quedó atrás también de esa cifra: 42.912 en 1995, 62.044 en 1996, 21 mil en 1997.⁵

João Pedro Stédile, líder del MST, criticó las mentiras ocultas por las de por sí limitadas cifras oficiales: “Se suma toda la historia del Brasil, desde Getúlio Vargas, el primero que colonizó oficialmente, hasta hoy. Las cifras indican proyectos de colonización, que no tienen nada que ver con asentamiento: hay consenso en que hay 150 mil familias asentadas en los últimos 15 años, todas como producto de la lucha, en ningún caso por iniciativa del gobierno”. También el PT (Partido de los Trabajadores) planteaba una reforma en el cuadro del desarrollo capitalista, “articulada con una política de desarrollo territorial y complementación agroindustrial (que) constituye una opción para la dinamización político-económica del interior, de las ciudades pequeñas que gravitan en torno de la economía agraria: 3.300 municipios con menos de 25 mil habitantes” (hay en Brasil poco más de 5.000 municipios).⁶

Sometido a la influencia eclesiástica y del propio PT, el MST se definió como “movimiento no institucional”, lo que significa que no planteó una alternativa política general. Al no hacerlo, la reforma agraria, inclusive los asentamientos conquistados por la acción directa, pasaron a depender del visto bueno del propio gobierno, o sea, de la liberación de créditos rurales de todo tipo, incluidos los de la reforma agraria, así como numerosos programas complementarios (Procera, PRONERA, etc.). En las condiciones de crisis económica, los gastos sociales son sistemáticamente cortados, y lo que queda es usado como elemento de

chantaje sobre el movimiento agrario. La consigna del MST es “ocupar, resistir, producir”. A medida que se llegaba a la última fase (“producir”), el crédito pasaba a ser esencial.

Stédile afirmaba que “el pequeño productor no puede competir con las grandes propiedades exportadoras, pero no es incompatible con ellas”. El MST propuso entonces que la pequeña propiedad fuese estimulada a producir alimentos, e integrada a pequeñas y medias agroindustrias. Pero la Coordinación Nacional del MST denunció lo que cabía esperar de la política oficial del gobierno FHC. El gobierno había gastado apenas 28% del presupuesto aprobado para la reforma agraria. Comprometido en garantizar los elevados beneficios de los bancos, el gobierno retiró R\$ 181 millones de la reforma, 14% de todo su presupuesto.

En cuanto al Pronera, el presupuesto garantizaba proyectos de educación de jóvenes y adultos en 1.538 asentamientos, con 100 mil alumnos, en colaboración con 39 universidades. Los cortes del gobierno FHC retiraron 90% de los recursos. Sólo 3 millones de reales fueron ejecutados, lo que alcanzaba apenas para alfabetizar 7 mil trabajadores, en vez de 100 mil. Pero FHC autorizó la renegociación de la deuda de los grandes productores, con alargamiento de los débitos en 20 años y rebaja de las tasas de interés, así como que 100% de los recursos tomados por los bancos para la agricultura sean usados para comprar títulos públicos con corrección cambial.

Bajo el gobierno “socialdemócrata” del PSDB, se promovió una verdadera anti-reforma agraria, acelerada por la propia crisis económica. En 1985, había (según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE) 23,4 millones de personas ocupadas en el campo, número que cayó a 16,6 millones en 1996. En el mismo período, el número de establecimientos agrícolas cayó de 5,8 millones a 4,98 millones: casi un millón menos, de los cuales 600 mil fueron suprimidos en el sector mayoritario de la agricultura familiar (explotaciones con con menos de 10 hectáreas). El INCRA, a su vez, registra 300 millones de hectáreas improductivas, pero el ITR de 1997, con previsión de 1,2 millones de reales, recaudó sólo 200 millones (imenes de una coca-cola por hectárea improductiva!). Entre 1985 y 1995 fueron eliminados 5,24 millones de puestos de trabajo en el campo, y en 1996 (durante solo un año del gobierno FHC) 1,5 millón: bajo el gobierno de FHC también fueron suprimidas 400 mil pequeñas propiedades (para un total de 600 mil suprimidas en toda la década).

En 1997, Brasil pasó a importar U\$S 7,5 mil millones de productos agrícolas (antes producía 90% del trigo que consumía, ahora 66%); cultivaba 7,1 millones de hectáreas menos que en el inicio de la década del '90. Bajo FHC, el área plantada cayó de 38,5 a 35,7 millones de hectáreas (-7,2%): entre 1994 y 1997, los precios recibidos por los agricultores aumentaron 37,5%, mientras que los insumos aumentaron 60,1% (la renta agrícola cayó 59%). El Pronaf (programa de apoyo a la agricultura familiar) liberó R\$ 2,5 mil millones, para una demanda de 4 mil millones.

La concentración agraria avanzó como nunca, aprovechando la crisis agrícola y la caída del precio de la tierra (-40 a -50% bajo el Plan

⁵DAVID, B.A. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária. In: STÉDILE, João P. (org.). *Op. Cit.*, p. 52.

⁶TAVARES, Maria da Conceição. A questão agrária. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 1997.

Real). Ligado a esto estuvo el avance de los grupos paramilitares de los latifundistas, ahora más integrados con la policía: en el primer mandato del gobierno de FHC, fueron asesinados más de 150 trabajadores agrarios, con dos masacres, la de Corumbiara (11 muertos) y la Eldorado dos Carajás (19 muertos). Nadie fue preso, como también sucedió con el asesinato de dos líderes del MST en Pará (abril de 1998), continuación de la masacre de Eldorado, pues encabezaban 550 familias que estaban juntándose a otras 690, sobrevivientes de la masacre que se encontraban en el asentamiento Palmares. Y FHC, con sus supuestos 100 mil asentados, se proclamó el campeón de la reforma agraria. Su política para el campo brasileño fue la de “privatizar la reforma agraria” al Banco de la Tierra: comprar tierra poco productiva a los latifundistas, para dársela al campesinado, desarticular los movimientos de lucha por la tierra, favorecer a las grandes haciendas exportadoras y entregar el control del mercado agrícola a las empresas multinacionales.

No es de extrañar que la lucha agraria haya sido más importante que nunca bajo FHC, ahora ya como movimiento nacional organizado: el MST, originario del Sur, pasó a tener más de 50 mil familias asentadas en el Nordeste. Sus marchas, especialmente la que concluyó con la ocupación de Brasilia el 17 de abril de 1998 (en el primer aniversario de la masacre de Eldorado), con más de 100 mil personas, se transformaron en el canal de protesta de toda la población trabajadora del país.

El Frente Popular organizado alrededor del PT (Partido de los Trabajadores), en el programa de la *União do Povo-Muda Brasil*, de 1989, prometía, en el capítulo titulado “Paz en el Campo”, asentar 1 millón de familias e irrigar un millón y medio de hectáreas, en 4 años, previendo un costo de U\$S 12-15 mil por familia asentada (indemnizaciones incluídas) sin contar gastos en salud, educación e infraestructura.

Todo esto estaba por detrás de las necesidades objetivas inmediatas, de la explosividad de la situación agraria y de los propios reclamos del MST: asentamiento de 4 millones de familias, créditos de U\$S 18 mil por familia, pagables en 20 años (y no en 7), desapropiación inmediata de toda tierra improductiva con potencial agrícola, cobro en tierras de todos los grandes deudores de la Sudene (Superintendencia de Desarrollo del Nordeste), frentes de trabajo en el NE para 2 millones de personas, controladas por comunidades y sindicatos, aumentos salariales y canasta familiar para todas las familias. El programa petista no era claro siquiera acerca de los medios necesarios para su reforma: en la práctica, el PT privilegió, durante la campaña electoral, las relaciones con la moderada Contag (ya entonces afiliada a la CUT); su Encuentro Nacional Extraordinario rechazó la moción presentada por la izquierda de legalización de las ocupaciones de tierra ya realizadas.

Neoliberalismo y cuestión agraria

La política de la reforma agraria “legal” tuvo una base de cálculo cuestionable: “El Censo Agropecuario de 1985, del IBGE, apuntó la existencia de 24,5 millones de hectáreas productivas no utilizadas,

grandeza sustancialmente diferente a la del INCRA”.⁷ El uso del ITR como medio de limitar el latifundio improductivo se fue revelando ridículo: la pequeña y mediana propiedad siempre han pagado más impuesto que la grande; en 1994, menos de 40 millones de reales (U\$S 32 millones, en ese momento) fueron recaudados con ese impuesto.

Los trabajadores rurales formaban casi 40% de la población económicamente activa, en sus diferentes categorías, sobreviviendo 5 millones de establecimientos familiares, productores de la mayor parte de lo que el mercado interno consume. El sector agrícola produjo, bajo FHC, 50 mil millones de dólares anuales (12% del PIB). La caída de 27% de los precios perjudicó a los pequeños agricultores, pues éstos producían para el mercado interno, lo que se agravó con el surgimiento del Mercosur, que eliminó tasas de importación para productos más baratos de los tres socios del Brasil. Hay también 6 millones de asalariados en el campo, temporarios o permanentes, sometidos a migraciones y abandono de sus familias. Una investigación realizada en la UERJ (Universidad Estadual de Río de Janeiro) en la década de 1980, demostró que más de la mitad de los habitantes rurales vivía por debajo de la línea de pobreza (con menos de un cuarto de salario mínimo, 25 dólares, por cabeza). Eran 3,4 millones de familias de pequeños propietarios, aparceros, medieros, asalariados y trabajadores sin remuneración, 53% de los habitantes del campo: en estados como Ceará, Paraíba y Piauí, sumaban más de 70% de la población rural.

Frente a ello, la estrategia del MST estaba frente a un impasse objetivo, por su dependencia frente al Estado en el crédito rural (y su consecuencia, la ocupación de bancos de crédito agrícola y edificios del INCRA, cuando esos créditos no eran conseguidos o implementados), ínfimo, por otro lado, frente a la miseria rural, del que no parecía poderse salir promoviendo el “cooperativismo socialista” en los asentamientos, definido como “la cooperación que nace con el objetivo del autosostén y para intervenir en el mercado (esfera de la circulación), iniciando su liberación del transportista (camionero) y del intermediario (comerciante)”.⁸

Afirmaba el MST que “nuestra gran diferencia es sobre los objetivos económicos, políticos y sociales en las cooperativas, que es cuestión de principios internos” (organización de los cooperativistas en núcleos, distribución democrática de los excedentes): “en términos de organización espacial y geográfica las agrovillas, que permiten la urbanización y facilitan las inversiones sociales en luz eléctrica, agua potable, en escuelas más próximas de los niños”.⁹ Cerca de 900 escuelas primarias, 1.500

⁷Graziano, Francisco. *Qual Reforma Agrária?* San Pablo, Geração Editorial, 1996, p. 77.

⁸MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). *Uma Concepção de Desenvolvimento Rural*. s.d.p., p. 28.

⁹Stédile, João Pedro. Entrevista. *Universidade e Sociedade* nº 13, San Pablo, s.d.p., p. 57.

profesores, 300 monitores de alfabetización, 35 mil niños y adolescentes, representan la estructura educacional del MST.

En la práctica, en los sectores cooperativos más antiguos, ya se desarrollaban relaciones asalariadas con los campesinos llegados más recientemente. “Nuestro futuro está ligado a la agroindustria”, sostuvo José Rainha, símbolo del MST, en relación con la cooperativa más desarrollada, la Cocamp (del Pontal de Paranapanema), que recibiera créditos para instalar una fábrica de frutas elaboradas, otra lechera y otra de procesamiento de granos, y que esperaba plantar 2 millones de pies de café en 1999, transformando al Pontal en la principal región cafetera del estado. En 1996, una encuesta constató que la mayoría de los asentamientos, de un total de 1564, se organizaban en forma de cooperativas de producción, habiéndose constituido hasta ese momento 55, asociadas a la Confederación de las Cooperativas de Reforma Agraria del Brasil (CONCRAB).

Con la reelección de Fernando Henrique Cardoso (FHC), en 1998, y la crisis económica de 1999, con una repentina y violenta devaluación del real, estas perspectivas comenzaron a hundirse, con lo cual el MST rompió la tregua establecida con el gobierno y recommenzó las invasiones: un ingenio en Pernambuco, tres haciendas en el Noroeste de Paraná y otras tres en el Pontal de Paranapanema. Una investigación demostró que la gran mayoría de los asentamientos, entre 1994 y 1997, fue consecuencia de invasiones campesinas: de 352 asentamientos en San Pablo, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, 304 fueron producto de invasiones de campesinos sin tierra, y sólo 48 de iniciativa del gobierno federal.¹⁰

En los 8 años del gobierno FHC, poco avanzó la reforma agraria. Brasil continuó teniendo el latifundio más grande del planeta, perteneciente a la constructora Almeida, de Curitiba, con 4,5 millones de hectáreas, casi la mitad del estado de Sergipe. Eran 27.556 los terratenientes que poseían propiedades mayores de 2 mil hectáreas cada uno, siendo propietarios de 178.172.765 hectáreas, o de 43 % de todas las tierras de Brasil. También había 4,6 millones de familias agrarias sin tierras. En Brasil, debido a la concentración de la propiedad de la tierra, 40 millones de hectáreas son cultivadas, en otras palabras, solamente 10 % del potencial existente: la mayoría de esas explotaciones está en las propiedades con menos de 500 hectáreas.

El gobierno de FHC había establecido como una de sus prioridades llevar a cabo la reforma agraria, la meta para su mandato (1995/98), era el asentamiento de 280.000 nuevas familias de trabajadores rurales sin tierra. Para alcanzar ese objetivo el gobierno estableció un número creciente de beneficiarios anualmente, de tal manera que, según las informaciones del propio gobierno (datos que no coinciden con los del MST), en 1995 se asentaron 40.000 familias; en 1996, 60.000.

Paralelamente, durante los años de 1995/2002 (gobierno de FHC) la concentración de la propiedad de la tierra se incrementó: los

terratenientes con más de 2 mil hectáreas incrementaron sus propiedades en 57 millones de hectáreas. Las compañías extranjeras poseen en Brasil más de 30 millones de hectáreas de tierra, con regiones, como el oeste de Bahía, ya comprado por propietarios norteamericanos. En Brasil, los terratenientes apenas pagan impuesto territorial rural (ITR): el valor pago es de aproximadamente R\$ 1 por hectárea / año; el valor total de ITR pago en todo Brasil es más pequeño que el que los habitantes de un barrio del centro urbano de São Paulo pagan, en un año, a la municipalidad, con la contribución urbana (IPTU, impuesto territorial urbano).

El parasitismo del latifundismo puede ser medido a través de algunos datos del censo agrícola de IBGE: las propiedades de menos de 100 hectáreas ocupan 21 % de las zonas rurales, pero son responsables por 38 % de la inversión total, usan 81 % de los obreros ocupados en tareas rurales, y responden por el suministro de 56 % de los alimentos vegetales y el 67 % de las comidas de origen de animal, con 47 % del valor de la producción. Es este sector el que genera alimentos y trabajo.

El proceso de concentración capitalista no alteró la estructura agraria (latifundista) brasileña. De los 851 millones de hectáreas en que se divide el territorio brasileño, en 569 millones (un 70% del área) no hay actividad agropecuaria (áreas de la Amazonia y del Pantanal, reservas forestales e indígenas, ciudades, carreteras, presas y ríos). Se incluyen, sin embargo, en ese área, 106 millones de hectáreas de tierras fértiles, casi todas en el cerrado, aún por ser explotadas. Eso equivale a la suma de los territorios de Francia y de España. Del 30% restante (282 millones de hectáreas), 220 millones son pastizales (para 170 millones de bueyes y vacas) para crianza de animales; 40 millones (un 5% del territorio nacional) producen 120 millones de toneladas de granos y la mayor parte de los productos agrícolas; 20 millones producen caña (incentivados por el biocombustible), naranjas, café y otros cultivos permanentes.

Toda la producción de granos de Estados Unidos, el mayor productor mundial de alimentos, cabe en 140 millones de hectáreas. La diferencia es que los EEUU alimentan 290 millones de bocas, y en Brasil hay 180 millones de habitantes. Hay en Brasil 3.895.968 predios rurales con menos de 200 hectáreas. Los de mediana propiedad (de 200 a menos de 2000 hectáreas) suman 310.158. Los de extensión mayor a 2000 hectáreas, 32.264, ocupan 132 millones de hectáreas.

Brasil posee el mayor rebaño comercial bovino; ocupa el primer lugar en la exportación de carne y en la producción de café y naranjas; el segundo lugar en la producción mundial de soja; y el tercero en la de maíz. A pesar de eso, existe la desnutrición de 53,9 millones de personas. Buena parte de la producción agropecuaria es exportada, lo que sobra es para el mercado interno: pues sólo 4 empresas brasileñas controlan un 40% de la venta externa de soja, jugo de naranja, pollo y carne.

El capitalista de la llamada “revolución en el campo”, el héroe del *agrobusiness*, era y es, por lo tanto un espejismo. De las 851 millones hectáreas existentes en Brasil, solamente 42 millones corresponden al agronegocio, con 70 millones consagrados al ganado (pecuaria), 120

¹⁰O Estado de S.Paulo, 12 de octubre de 1998.

millones son (o serían) propiedad de los pueblos autóctonos, y 110 millones, tierras de protección del medio ambiente. El resto, casi 500 millones de hectáreas, se dividen entre latifundios improductivos y áreas *devolutas* (fiscales, pertenecientes al Estado). Y Brasil no es, justamente, el paraíso de la “preservación ambiental”. Transformado en uno de los principales productores mundiales de soja, la cultura de esa oleaginosa invadió el norte del país, la frontera agrícola principal de la así llamada “más grande reserva ecológica de la humanidad”, y ya empieza a avanzar en la selva amazónica, amenazando la biodiversidad de la región.

Más de 4 millones de familias fueron expulsadas de la tierra en los años de FHC, debido a la expansión del latifundio, a las altas tasas de intereses de los bancos y la construcción de diques. Entre 1985 y 1995 disminuyó en un millón la cantidad de establecimientos agropecuarios. Lo mismo sucedió con las parcelas productivas de menos de 10 hectáreas. Estos datos demostraban que cada día surgían más y más familias pobres que se quedaban sin tierras.

Brasil posee 600 millones de hectáreas cultivables, de que 250 millones son áreas devolutas, y 285 millones, latifundios, en su mayor parte improductivos. Casi un cuarto del territorio nacional (200 millones de hectáreas, equivalentes a la superficie de México) no tiene dueños conocidos, ya que no hay registro legal de su propiedad. Además, viven en el campo 1,2 millones de familias de *posseiros*, campesinos que ocupan tradicionalmente un pedazo de tierra y tienen derecho a su propiedad, pero no poseen títulos que les aseguren la ocupación legal de los predios. Nueve millones de trabajadores rurales son, ellos mismos, indocumentados. Brasil mostraba una de las más dispares distribuciones de la tierra en el mundo, con 90% de la tierra en manos de 20% de la población, mientras que el 40% más pobre apenas posee 1% de la tierra.¹¹

Bajo el gobierno de Lula

Por eso, la reforma agraria era la más esperada de las reformas del gobierno de Lula, quien afirmó que consideraba la reforma agraria como estratégica para superar la crisis social, y prometió realizarla a través de la ampliación de la política de crédito fundiario, de la formación de cooperativas y de la intensificación de la economía de solidaridad. El Programa *Fome Zero*, que se propuso garantizar comidas en cantidad y calidad para aproximadamente 44 millones de personas, tendría éxito solamente si apoyado por la reforma agraria. Era un compromiso de campaña y del gobierno de Lula presidente.

Después de la constitución del gobierno, Lula nombró a Miguel Rossetto, para el ministerio estratégico del Desarrollo Agrario. Inicialmente el Ministro afirmó que el gobierno quería revocar el decre-

¹¹En general, Brasil se encuentra entre las cinco más desiguales distribuciones de renta del planeta: el 10% de los más ricos posee un 46,9% de la renta nacional, mientras 10% de los más pobres sobreviven dividiéndose entre sí un 0,7%. La tajada de los ricos es 67 veces mayor que la de los pobres.

to del gobierno de Fernando Henrique Cardoso que prohibía al Inca (el instituto nacional de la colonización y la reforma agraria) revistar las tierras invadidas por los sin tierra, con vistas a su expropiación, durante dos años. El ministro se declaró admirador de MST.

Bastaron, sin embargo, un par de las quejas de los terratenientes, para que el ministerio del desarrollo agrario negase las noticias de que pensaba revocar el decreto mencionado. Pocos días después, Rossetto garantizó que el gobierno no presentaría propuesta de extinción o alteración del decreto (de n° 2183). En tono rotundo, el ministro repitió esa declaración a un grupo de 50 propietarios, todos miembros de la dirección del consejo de la sociedad rural brasileña, la más tradicional del país. Al día siguiente, la *Pastoral da Terra*, se unió al MST, y denunció que “los agricultores se están armando para impedir la reforma agraria”, lo que era confirmado (o mejor, admitido) en una carta enviada al congreso nacional por el movimiento nacional de productores (MNP), dentro de la cual se amenazaba con la creación de milicias: “Sin otra salida, los productores también pueden tomar decisiones al margen de la ley de defender sus propiedades.” El MST, por su lado, denunció que la creación del primer comando rural (PCR) demostraba claramente para la opinión pública “quienes son los ladrones”. El PCR fuera fundado por terratenientes que copiaban el nombre y la estructura de PCC (primer comando de la capital), la organización principal del crimen y del tráfico de drogas en el país.

El PSDB, partido de FHC, derrotado en las elecciones del 2002, hizo responsable al gobierno por la “tensión” en el campo: Arthur Virgílio, jefe de PSDB en el senado, dijo que el gobierno de Lula era responsable por el aumento de la tensión en el campo, acusando al coordinador del MST, João Pedro Stédile, de trabar una guerra contra los agricultores. El senador dijo que el gobierno cometió un error al tratar al MST como socio, concediéndole la dirección del INCRA.

El 2 de julio de 2003, el MST envió una carta a Lula, conteniendo una propuesta de reforma agraria, incluyendo el asentamiento de un millón de campesinos sin tierra en el periodo de 2003 a 2006, con un programa de créditos especiales para la reforma agraria, asociar la reforma agraria a un masivo programa de educación en el campo; intensificando la campaña para la erradicación del analfabetismo en las áreas de establecimientos rurales, siendo necesario asignar más recursos financieros al MEC (Ministerio de Educación) para ese propósito; promocionar un programa de entrenamiento profesional que involucrase 20 mil jóvenes y adultos de las áreas de establecimientos y campamentos; combate contra la impunidad de los asesinatos cometidos en el campo (aprobandos el proyecto de enmienda constitucional que transferiese la competencia de investigar y procesar los crímenes contra los derechos humanos); determinar la investigación contra los agricultores que usan milicias armadas, incitan la violencia y el crimen, y mantienen vinculación con el tráfico de drogas y el contrabando de armas; contrario a la liberación de la plantación y la comercialización de los productos transgénicos; un nuevo modelo agrícola para la generación de trabajo, la producción de

alimentos para el mercado interno, la soberanía alimentaria, y la valorización de la vida en el campo.

En septiembre de 2003, sin embargo, se produjo el retiro de gran cantidad de funcionarios del gobierno ligados al MST, incluido el presidente del INCRA. El MST se manifestó contra el cambio de la presidencia del INCRA, declarando “nuestro respeto por el presidente depuesto”: “El MST siempre ha mantenido y mantendrá su autonomía en relación con el gobierno; defendimos la necesidad de una reforma agraria como la política de prioridad del gobierno. Las personas eligieron al presidente Lula para hacer los cambios en el modelo agrícola en curso; defendimos una reforma agraria que fuese un instrumento para solucionar los serios problemas de desempleo, del hambre y de la pobreza en el medio rural; para eso necesitábamos una reforma agraria popular, con la democratización del acceso a la tierra, con la expropiación del latifundio improductivo, como determina nuestra Constitución federal. (...) Esperamos que el gobierno asuma las medidas necesarias, sea de presupuesto y/o administrativas, para que la reforma agraria sea verdaderamente una prioridad; de nuestra parte, como movimiento social, seguiremos con nuestra tarea principal, es decir, organizar a los trabajadores para seguir luchando por la reforma agraria”.

Para la organización de los terratenientes, la UDR (Unión Democrática Ruralista), la destitución de Resende, el ex-presidente del INCRA vinculado al MST, era “un paso importante”. En su lugar fue nombrado Rolf Hackbart, que ejercía la función de asesor técnico de los líderes del Gobierno en el Senado y ya fuera presidente del Banco Regional del Desarrollo Económico. El cambio de comando atrasó el proceso de reforma agraria y, principalmente, los proyectos de asentamiento de millares de familias.

El presidente nacional de la UDR, Luiz Antonio Nahban Garcia, declaró que la destitución de Marcelo Resende de la presidencia del INCRA “fue un paso importante para reducir la radicalización en el campo”, porque “todos sabían que Resende era radical y apoyado por el MST”. En julio de 2003, la prisión a José Rainha, militante símbolo del MST, apareció como un símbolo de la nueva situación política en el campo. El arresto de José Rainha fue seguido de la prisión de su esposa, Diolinda de Souza, también activista agraria. La lógica de las prisiones siguió el argumento jurídico usado durante el gobierno precedente, demostrando la persecución política al MST. El juez dijo: “El acusado José Rainha y Diolinda Alves aparecen en los medios de comunicación nacionales no sólo como jefes del movimiento sino también como sus portavoces, en otras palabras, los símbolos rojos”. Otros reos fueron condenados con menos fundamentos. La calidad de la persecución política era evidente por el hecho de que la acusación estaba llena de consideraciones del tipo “las acciones promovidas por MST” serían nocivas, y “el gobierno está financiando, aunque parcialmente, la ilícita práctica de MST.”

Stédile continuó considerando al gobierno de Lula como un “gobierno popular”, y atacó a “los movimientos que pasaban directamente a la

oposición”. Aunque en octubre de 2003, el MST dejó claro que “en los primeros diez meses del gobierno de Lula había pocas alteraciones en la política con los asentados”. Una nota a la opinión pública del CIMI, Consejos de Misioneros Indigenistas, condenaba el decreto n° 1487, publicado en el Diario Oficial de la Unión el 9 de octubre de 2003, que redujo las tierras del territorio autóctono tradicional de la tribu *kayapó* en 307.000 (trescientos siete mil) hectáreas, favoreciendo mineras rurales y políticos de la zona (el sur del estado de Pará), cediendo a las presiones de las compañías mineras.

Desde el 1° de enero hasta el 30 de noviembre de 2003, la ya mencionada Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) hizo constar 71 homicidios de trabajadores rurales en los conflictos en el campo. El número era 77,5% mayor que el del mismo período del año precedente, y el más alto desde 1991, cuando ocurrieron 54 muertes. Y había un aumento en los intentos de homicidio, eran 76,3% mayores que en 2002, y en el número de familias expulsadas por órdenes judiciales, 87,8% mayor. Pero también el número de las ocupaciones agrarias se incrementó 86,3%, y el de campamentos, 209 %.

En enero de 2003, los movimientos agrarios requerían el establecimiento de 400 mil familias sin tierra del gobierno de Lula. El gobierno dijo inicialmente tener capacidad para asentar 140 mil familias en su primer año, después bajó la promesa para 60 mil familias. Terminando el año, sin embargo, había poco más de 20 mil familias asentadas. Del presupuesto destinado a la reforma agraria, 65 % fueron cortados por el propio gobierno, como parte de su política de “superavit primario” para garantizar el pago de la enorme deuda pública (principalmente interna). El plan de reforma agraria del gobierno prevía el asentamiento de poco más que 350 mil familias en cuatro años. El gobierno no consideró la propuesta lanzada por Plínio de Arruda Sampaio, que prevía la posibilidad de asentar un millón de familias durante el mandato de Lula, con un costo de R\$ 18 mil millones, una fracción mínima de lo destinado al pago de los encargos financieros del estado federal.

El plan del gobierno de Lula, presentado por Miguel Rossetto, tenía su eje en el intento de asociar, de manera subordinada, la pequeña producción al *agrobusiness*, con el establecimiento de 335 mil familias durante el conjunto del mandato de cuatro años. Rossetto, simultáneamente, aseguró que cumpliría la promesa del presidente Lula de otorgar predios rurales a 400.000 familias en los cuatro años del gobierno, hasta fines de 2006. En 2003 sólo fueron asentadas, oficialmente, 37.000 (según el MST, poco más de 20 mil).

En abril de 2004, el gobierno anunció la expropiación de miles de hectáreas de tierras para ser entregadas en planes de reforma agraria. 44 mil 300 hectáreas, distribuidas en 11 de los 26 estados del país, fueron consideradas improductivas y por tanto entregadas al INCRA. El lote de hectáreas era el segundo expropiado por el gobierno ese año, después que en febrero se entregara al INCRA otro de 59 mil 800 hectáreas. No se informó, sin embargo, los montos pagados por las expropiaciones. El anuncio se producía en medio de una nueva ola de invasiones a hacien-

das y terrenos por parte del MST, que buscaba presionar al gobierno para agilizar la entrega de lotes y financiamiento para el establecimiento de familias. Desde finales de marzo y en abril, más de 15 mil familias ocuparon 53 terrenos en 14 distintos estados brasileños.

A finales de 2005, sin embargo, la “redistribución de tierras” estaba paralizada en Brasil, evaluaron los 45 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales del Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo. La acción del gobierno en esa área se redujo a “un mero programa de asentamientos”, en cantidad inferior a la prometida, que no cambiaba el cuadro brasileño de concentración de la tierra ni expande la agricultura familiar y campesina. Un estudio de la Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (de la Universidad de San Pablo), divulgado en 2005, comprueba que en Brasil, la agricultura familiar tiene más importancia económica que el agronegocio. Según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de las 4,9 millones de propiedades rurales existentes en el país, 4,1 millones dependen de la mano de obra familiar, responsable por un 38% de la producción agropecuaria del país. El campo emplea 17,9 millones de personas. Las propiedades de hasta 50 hectáreas absorben un 86% de los trabajadores rurales. De cada 10 trabajadores rurales, 8 están en la producción familiar. La mediana propiedad absorbe un 10,2% y el latifundio, un 2,5%.

De los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños, más del 60% provienen de la agricultura familiar. Ella produce casi un 70% de los frijoles, un 84% de la yuca, un 58% de los cerdos, un 54% del ganado lechero, un 49% del maíz, y un 40% de las aves y huevos. En la producción de carne vacuna, la pequeña propiedad rural contribuye con un 62,3%; la mediana, con un 26,4%; la gran propiedad, con un 11,2%. La producción lechera depende de la ganadería familiar en un 71,5%. El latifundio produce sólo un 1,9%. Las medianas responden por un 26,6%. El grueso de la producción agropecuaria del país depende de las pequeñas y medianas propiedades. Sin embargo, el mayor volumen de crédito aún es absorbido por las grandes propiedades. Los productos de exportación están exentos de Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en la producción, comercialización e importación de insumos agrícolas.

Refiriéndose a 2005, “este fue el mejor año de la reforma agraria en la historia de Brasil”, dijo el secretario ejecutivo (viceministro) del Ministerio de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel: “se entregaron tierras a 111.200 familias desde el inicio del año”. Joao Pedro Stédile, del MST, rebatió afirmando que, al contrario, el gobierno estaba usando “los mismos fraudes” de la administración anterior, contando como nuevos asentamientos la simple regularización de familias ya asentadas o la sustitución de las que abandonaron la tierra recibida: la mayoría de las familias quedaron aisladas en la Amazonia, “viviendo en pésimas condiciones”, sin posibilidad de producir ni de vender sus cosechas. No se están cumpliendo los principales puntos acordados en mayo entre el gobierno y el MST, como la meta cuantitativa y la prioridad para los grupos familiares que viven acampados.

Según el MST, hay 140.000 familias de campesinos sin tierra viviendo en campamentos precarios, en tiendas de plástico negro, al borde de carreteras o en predios ocupados, a la espera de que el gobierno les asigne una parcela. De acuerdo con el gobierno, cerca de 20.000 familias asentadas este año provienen de los campamentos controlados por los movimientos campesinos.

En los dos primeros años del gobierno de Lula, 2003 y 2004, el Instituto de Colonización y Reforma Agraria anunció haber asentado a 117.555 familias. Aun cumpliendo la cuota de ese año, quedarían más de 160.000 familias para alcanzar la meta en 2006, de lo que no se está ni cerca. Durante los ocho años en que gobernó Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se asentaron oficialmente 524.000 familias, un dato también cuestionado por el MST. “Este gobierno no logra promover una verdadera reforma agraria porque le da más importancia al agronegocio exportador, y se ha sometido a los grandes terratenientes y adoptado una política económica que favorece al sector financiero, a las empresas transnacionales y a la gran agricultura de monocultivos”, dijo un documento oficial del movimiento campesino.

Agroindustria y monopolio

En el medio rural brasileño se desarrolla una disputa entre la gran producción agroindustrial, para la cual son prioritarias la exportación y la tecnificación, que provoca desempleo y aumenta las ganancias, y la agricultura familiar y campesina (que abastece de alimentos el mercado interno, y emplea a más de 85% de la mano de obra rural). La economía mercantil capitalista tradicional creció en el campo a través de una producción de alcance poco variable de productos, sobre todo de cereales, productos primarios destinados a la venta en un mercado no muy flexible. El crecimiento de la productividad del sector resulta del bajo valor unitario del producto, y de la elasticidad pequeña del consumo de productos primarios en los países desarrollados.

Una posibilidad de superación del impasse vivido por la agricultura tradicional consistía en la expansión del mercado consumidor. La solución encontrada fue la ampliación de ese mercado a través del aumento de mercancías producidas, a partir de una cantidad limitada de materias primas. En otras palabras, con el lanzamiento incesante de nuevos artículos creados por los laboratorios de las industrias del sector. El capital industrial del sector dominó el mercado a través de la creación incesante de nuevas necesidades de alimentación, productos alimenticios pré preparados; pré cocinados; diversificados; con gran importancia, a partir de entonces, de la mercadotecnia (*marketing*), creadora de las nuevas necesidades.

Los capitales de la agroindustria condicionaron los procesos: el nuevo diseño de la acumulación de la industria de alimentos dominó y revolucionó la agricultura, exigiendo el suministro inmediato y elástico de variedad de productos. El proceso de verticalización excluyó a pequeños productores, en función de su incapacidad de acompañar las

nuevas demandas industriales. El nuevo diseño satisfizo los capitales completamente involucrados en el agronegocio.

Consolidado el proceso en los países desarrollados en la década de 1980, el nuevo modelo de la reproducción ampliada del capital agroindustrial exigió su internacionalización, en la década de 1990. La internacionalización de los “nuevos productos” exigió la creciente uniformización de los hábitos de alimentación, los gustos, etc. en una globalización del consumo impelida por los medios de formación de la opinión - medios de comunicación, películas - y por las redes mundiales de la distribución de comidas. El corolario, en la economía mundial, fue la liberalización de la producción y del comercio, a través de las negociaciones multilaterales consumadas bajo la hegemonía del gran capital. En los países del capitalismo atrasado, la economía fue desregulada, y las fronteras nacionales se abrieron, grandes compañías fueron desnacionalizadas, etc. De este modo, crecieron las mejores condiciones para la construcción de oligopolios inmensos de industrias agroalimentarias.

Brasil fue un escenario privilegiado de ese proceso, por el poder de compra de su clase media, por la existencia de cierto desarrollo agroindustrial endógeno, y su puesto estratégico en relación al Mercosur. También en Brasil, la metamorfosis de la industria de alimentación se hizo sentir a través de la adquisición - fusión de compañías nacionales e internacionales activas en el agronegocio: supermercados; beneficiadoras y comercializadoras de granos; industria de máquinas y herramientas, etc. La desnacionalización de la producción fue radical. El comercio externo de Rio Grande do Sul (RS), uno de los principales estados agrícolas del Brasil, pasó a ser controlado por algunas pocas compañías transnacionales. En RS, de la retracción del área plantada con cereales, en 1985 - 1995, de un millón de hectáreas, 80% ocurrió en propiedades de menos de 100 hectáreas.

Las metamorfosis sufridas por el agronegocio brasileño se basaron en la penetración inevitable de nuevos sectores productivos por el gran capital, en busca de ganancia en ramas industriales tradicionales, a través del aumento de la composición orgánica del capital. Ese proceso, tecnológicamente positivo porque eleva la productividad del trabajo, es históricamente retrógrado y destructor en la fase actual del desarrollo histórico. Además, con la composición orgánica en crecimiento del capital invertido en agricultura, se hace impracticable la entrada, e inevitable la expulsión, de compañías nacionales y pequeños productores en ese sector.

Se trata de un mercado muy monopolizado, dominado por seis grandes compañías, que tienen el control de 90 % del mercado mundial de semillas: las norteamericanas Monsanto, Dow Chemical, Astra Zeneca, Du Pont, y las europeas Novartis (francesa, coalición de Bayer y Ciba Geigy) y Aventis (coalición de Hoechst y Rhône Poulenc). La guerra comercial entre esos monopolios incluye la compra de compañías más pequeñas, configurando un grupo más y más reducido de sociedades anónimas que va consiguiendo un control sin precedentes sobre todos de los aspectos comerciales de las comidas, la agricultura y la salud. Hace

20 años existían miles de compañías de venta de semillas, la mayoría de ellas familiares. Hoy, las diez mayores compañías de semillas controlan la tercera parte del comercio mundial de semillas. Hace 20 años existían 65 compañías de agroquímicos que producían *inputs* agrícolas. Hoy, las 10 compañías principales de agroquímicos controlan más del 90% del mercado mundial, valorado en 30 mil millones de dólares. En 1989, las 10 compañías farmacéuticas más grandes controlaban 29% de las ventas del mundo. Hoy, las 10 más grandes controlan más del 50%. En la actualidad, las diez compañías más grandes del mercado veterinario controlan 61 % de ese mercado, valorizado en 16 mil millones dólares.

Los “gigantes genéticos verdaderos”, en el campo de la biotecnología agrícola, son esencialmente siete, y todos figuran entre los fabricantes principales de pesticidas: Syngenta, Astra Zeneca, Novartis, Aventis, Monsanto, Dupont, y Dow Chemical. Esas compañías tienen 74 % de todas las patentes en ese sector. El área mundial de cultivos transgénicos se multiplicó 25 veces en cinco años, de 1,7 millón hectáreas en 1996, para aproximadamente 44,4 millones de hectáreas en 2000. Afirman que esos cultivos fueron difundidos más rápido que cualquier otra tecnología agrícola en la historia. Eso demuestra, dicen, que los agricultores aprecian esta tecnología realmente. Sin embargo, los transgénicos no son un fenómeno mundial. En 2000, solamente tres países, los Estados Unidos, Argentina y Canadá, eran responsables por 98 % del área plantada con transgénicos. Y las tres cuartas partes de todos los transgénicos agrícolas habían sido modificadas con solamente una característica: la tolerancia para herbicidas.

Además, el mercado de semillas transgénicas es dominado por solamente una sociedad anónima. En 2000, las semillas modificadas genéticamente por Monsanto fueron sembradas en 38 millones de hectáreas en el mundo entero. Es decir, 86 % del área total dedicada a los cultivos comerciales transgénicos. La uniformidad, la agricultura industrial y la concentración corporativa son la características que describe a los cultivos transgénicos, no la diversidad, no la seguridad nutritiva, no los “mercados competitivos”.

Los cultivos modificados genéticamente son una herramienta de la agricultura industrial, no de la agricultura sustentable. Los beneficiarios de esos productos son las compañías multinacionales, no el público. Son productos dibujados para retirar la producción de alimentos de las manos de las comunidades local, y crear la dependencia de los agronegocios de las sociedades anónimas transnacionales. La alarma sonó con la tendencia a eliminar el derecho de los agricultores de ahorrar sus propias semillas, guardarlas para la próxima cosecha, producir y mejorar sus propias semillas. Éste es un derecho ancestral que es reconocido por la de FAO de las Naciones Unidas como un derecho de los agricultores. Más de 400 millones de personas del mundo entero, pobres básicamente rurales, dependen del almacenamiento de sus propias semillas. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Quien controla las semillas controla la preparación de comidas. Con la ingeniería genética, las

semillas fueron convertidas en un “agente de sistema”, que los gigantes genéticos usan para desarrollar nuevas tecnologías genéticas.

El agronegocio se transformó en la *vedette* del gobierno de Lula, al batir todos los records históricos de exportaciones. En 2003, el agronegocio vendió US\$ 30,7 mil millones al exterior y garantizó el superavit de la balanza comercial. El total superaba en US\$ 5,8 mil millones (o 23,3%) las ventas US\$ 24,839 mil millones en 2002. Con eso, la participación de las exportaciones del agronegocio en el total de las exportaciones brasileñas se incrementó de 41,1% a 41,9% en 2003. Las importaciones aumentaron 6,6%, llegando a US\$ 4,791 mil millones. La balanza comercial del agronegocio también batió records, con un superavit de US\$ 25,848 mil millones, 27% encima del saldo favorable de US\$ 20,347 mil millones, registrado en 2002. El resultado puso al agronegocio como responsable por la totalidad del superavit global de US\$ 24,824 mil millones (los otros sectores económicos presentaron un déficit de mil millones de dólares en el mismo período).

El sector del agronegocio es responsable del 33 % del producto bruto interno (PIB) del país, estimado en R\$ 1,937 billón (poco menos de un billón de dólares) en 2005, y por 37% de los empleos brasileños. Otra información, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), apunta el modelo de la expansión del agronegocio como la causa principal de los 28 homicidios de agricultores, de enero a agosto de 2005.

Agrobusiness, exportaciones y deudas

El desempeño de las exportaciones en 2003 era atribuible al crecimiento de los precios internacionales de los productos primarios y a la entrada en nuevos mercados. El liderazgo en las exportaciones correspondió al complejo de la soja, que aumentó 35,2 %, de US\$ 6,008 mil millones hasta US\$ 8,125 mil millones. Además del aumento del volumen exportado en razón de la cosecha record de 52 millones de toneladas. También aumentaron las ventas de carne, compuestas de ventas de bovino y de carne de pollo. Las exportaciones del café aumentaron 7 %. En trigo, el Brasil empezó a exportar, 50 mil toneladas en 2003 (antes, no exportaba nada). Las ventas de 3,5 millones de toneladas de maíz añadieron US\$ 375 millones, resultado 40% superior al de 2002. Las exportaciones de papel y celulosa aumentaron 38 %, de US\$ 2 mil millones para US\$ 2,8 mil millones.

Las ventas externas se diversificaron en 2003, con un aumento expresivo de la participación de nuevos mercados, como Asia, Medio Oriente y Europa Oriental. En todos los bloques económicos principales hubo crecimiento de las exportaciones brasileñas: Mercosul, 40 %; Nafta, 17 %; UE (Unión Europea), 22,4 %; Europa Oriental, 26,8 %; Asia, 33,3 %; Medio Oriente, 34,3 %; y África, 9,7 %. Los países de la UE continuaron en el liderazgo, absorbiendo 36,4 % de el total exportado por el agronegocio brasileño. Asia incrementó su tajada de 16,7 % para 18,1 %, alcanzando al Nafta, quien presentó una reducción de 19 % para 18,1 % en su participación en 2003.

En el Brasil del “campo moderno”, de ese modo, está avanzada la transformación de la agricultura en una empresa rentable regulada por la ganancia y la producción para el mercado mundial. “Agronegocio” es sinónimo de “producción para el mundo”, para el mercado mundial. El campo exportó productos forestales (papel, celulosa, madera), carnes (bovino, suína y de aves); soja, cereales, trigo y aceite; café; azúcar y alcohol; jugos de frutas; algodón y verduras; tejidos de fibras; maíz; cuero, cáscaras, zapatos; tabaco; harinas; pescado, cacao.

La ironía fue que, en 2003, Brasil tuvo que importar arroz, algodón y maíz, además, evidentemente, de trigo. El “Brasil moderno” del “agronegocio que exporta”, tiene que importar arroz, frijoles, maíz, trigo y leche (las comidas básicas de los trabajadores brasileños) y otros productos y materias primas industriales, que cuentan con la posibilidad de producción amplia en el propio país.

El país produce y exporta la comida a la que no tiene acceso la mayoría de los trabajadores brasileños. En 2003, entre los 100 productos principales exportados, el complejo de soja respondió por el valor más extenso en dólares en el comercio con el exterior, por delante de las exportaciones de aviones, de mineral de hierro, automóviles, computadoras portátiles, telefonía celular, aluminio etc. En cuanto a las importaciones, el trigo estaba en el año 2003, en el segundo puesto; la soja importada en el decimonoveno; el arroz en el vigésimo quinto; la leche en polvo después, etc. El agronegocio moderniza al provinciano. Hay importación del trigo, pero ahora también de la leche. Es el perro que corre detrás de su propia cola.

En 1984, el año final del gobierno militar, Brasil exportó 27,005 mil millones de dólares. Ese año, los productos básicos participaron con 32,2% del total de las exportaciones; los semimanufacturados con 10,6%, y los industrializados con 56%. Con la integración mayor del Brasil en el capitalismo internacional, y con el proceso del crecimiento de la deuda externa, fue necesario incrementar las exportaciones para pagar los intereses de la deuda que, en 1964, era de 2,5 mil millones de dólares, y en 1984, de 102 mil millones de dólares. Entre 1981 y 1984 fueron pagados, por el gobierno militar 30,7 mil millones de dólares de intereses de la deuda externa, o sea, poco más de 30 % de su monto total.

En el gobierno de Sarney (1985), primer gobierno civil tras 21 años de dictadura militar, las exportaciones continuaron a crecer, y el país llegó al final de 1989, con un total de US\$ 34,3 mil millones exportados (con 27,8% de productos básicos; 26,9% de semimanufacturados, y 54,2% de productos industrializados. Sin embargo, incluso con la declaración breve de la moratoria de la deuda extranjera, ésta llegó a los 115,5 mil millones de dólares. A pesar de que el gobierno de Sarney pagó US\$ 67,2 mil millones dólares de intereses de la deuda externa, o 58,2% de la cantidad total debida.

Al final del gobierno Collor / Itamar Franco (1994), las exportaciones alcanzaban 43,5 mil millones de dólares (con 25,4% de productos básicos, 15,8% de semimanufacturados, y 57,3 % de productos industrializados). Pero la deuda externa también llegó en ese año a 148,2 mil

millones de dólares, con un pago de los intereses en el período del gobierno de Collor / Itamar del gobierno de 80,2 mil millones dólares, en otras palabras, más de 54 % del total de la deuda.

Bajo el gobierno de FHC el paisaje no fue diferente. El crecimiento de la deuda y de los pagos de intereses continuó ocurriendo, con la ampliación de las exportaciones. Éstas llegaron a un total de US\$ 60,3 mil millones en 2002 (con 28,1% de productos básicos, 14,9% de semimanufacturados y 54,7 % de de productos industrializados). La deuda externa, sin embargo, en 1998, llegó a 241,6 mil millones de dólares en medio de la crisis de la devaluación. La deuda externa brasileña registrada al final de 1999 era igual a 42 % de la riqueza que Brasil produce durante un año, o a aproximadamente cinco años de exportaciones. La deuda pública brasileña total, la llamada deuda mobiliaria federal, que era de R\$ 62 mil millones cuando FHC asumió el gobierno (1995), aumentó hasta R\$ 432 mil millones en 2000, teniendo una conexión íntima con el crecimiento de la deuda externa.

Durante los ocho años del gobierno de FHC, se pagó en concepto de intereses de la deuda externa la suma de 102,4 mil millones dólares, o sea, 45% del total de la deuda. De Sarney al gobierno de FHC, Brasil pagó, en concepto de intereses, un total de 250 mil millones de dólares de la deuda externa. Si a esa cantidad se añaden las amortizaciones de la deuda principal, de 1985 hasta 2002 (385,7 mil millones de dólares) se llega a un total de 635,7 mil millones dólares pagados: en 18 años, de 1985 a 2002, el Brasil pagó varias veces el total del monto de la deuda.

Es en esa lógica entran las exportaciones brasileñas y su espectacular crecimiento. Analizando la balanza comercial entre 1985 y 2002, las exportaciones generaron un superávit comercial de 143,4 mil millones de dólares. Pero entre 1995 y 2000, hubo un déficit de 24,3 mil millones dólares, debido a la valorización del real. El balance general en el período fue de 119,2 mil millones de dólares de superavit comercial. El balance “espectacular” del agronegocio y de las exportaciones brasileñas no llegó, por lo tanto, en el período, a la mitad de la cantidad pagada en concepto de intereses de la deuda externa: cuanto mayor la cantidad exportada, más la deuda creció, en beneficio del capital financiero internacional, y de los capitalistas nacionales e internacionales que incrementaron sus ganancias con el crecimiento de las exportaciones.

Durante el gobierno de Lula, a partir de 2003, la tendencia se mantuvo e incrementó. Como resultado general de la política económica, los costos del sector público con el pago de los intereses llegaron en los primeros ocho meses de 2003 a R\$ 102,42 mil millones, o 10,2 % del PIB. El gobierno federal, los estatales y municipales, la Previsión Social, el Banco Central, y las empresas estatales, gastaron con los intereses 68,75% más que en el mismo período de 2002 (R\$ 60,69 mil millones, o 7,17 % del PIB), o más de 60 veces que los R\$ 1,7 mil millones usados en el programa *Fome Zero*, principal bandera social del gobierno. El crecimiento de los costos con los intereses de la deuda fue provocado, básicamente, por la política de intereses altos asumida por el Banco Central: las tasas

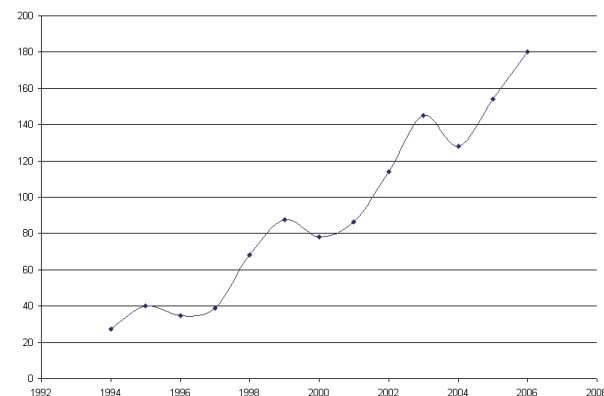
pagadas por el gobierno para que los inversionistas aceptasen sus títulos llegaron a alcanzar un techo de 26,5% (reales) al año.

En 2003, se registraron 73,0 mil millones de dólares en concepto de exportaciones. Las importaciones alcanzaban 48,2 mil millones de dólares, lo que configuraba un superavit comercial de 24,8 mil millones de dólares. Las exportaciones fueron incrementadas en 21,1% en relación a 2002, con un aumento total de 12,7 mil millones de dólares. De las exportaciones totales, los productos básicos eran responsables por 33,2%, los semimanufacturados, 15,6%, y los productos industriales, 54,3%. Los automotores (vehículos de carga, automóviles, repuestos de automóvil, neumáticos y motores para vehículos) fueron la sección que generó los saldos de exportación más grandes, con ventas totales de 10,6 mil millones de dólares, correspondientes a 14,6% del total de las exportaciones.

Los compromisos con la deuda externa e interna no sólo continuaron, sino que también crecieron. Lula recibió el país con una deuda externa de 227,68 mil millones de dólares, de la que se amortizaron en 2003 un total de 34,31 mil millones de dólares, además del pago de 13 mil millones de dólares de intereses. La deuda externa llegó a 219,9 mil millones dólares al final del ejercicio. La deuda pública total federal, que incluye la deuda externa, pasó sin embargo de R\$ 826,9 mil millones en diciembre de 2002, para R\$ 929,3 mil millones (o US\$ 400 mil millones, aproximadamente) al final de 2003, con un crecimiento de 12 %.

O sea, fue pagado un monto correspondiente a 28% de la deuda, y aún así, en enero de 2004, la deuda era 12% más grande que al principio del gobierno Lula. Los pagos en concepto de intereses crecieron también, llegando a R\$ 145,2 mil millones en 2003, una cifra superior al 60% del presupuesto federal. En 2006, la deuda pública total federal superó la barrera simbólica de R\$ un billón (situándose próxima de US\$ 500 mil millones).

Un gráfico relativo a la deuda pública federal en los últimos doce años (1994-2006), muestra la trayectoria siguiente, expresada en miles de millones de reales:



En sus primeros dos años, el gobierno de Lula (con su ministro de Economía, Palocci) pagó R\$ 300 mil millones a los acreedores, sin reducir la deuda, que era de R\$ 900 mil millones en diciembre de 2003 (mientras aplicaron menos de mil millones para la reforma agraria, o cinco mil millones para las universidades públicas). En sus ocho años de mandato, el gobierno FHC pagó R\$ 461 mil millones en deudas, en los cuatro años de Lula, fueron pagados en el mismo concepto R\$ 626 mil millones. El gobierno de Lula reforzó su alianza con los especuladores financieros nacionales e internacionales. El Banco Itaú, principal institución financiera nacional, anunció el beneficio semestral más grande de la historia financiera del país, en 2005: casi R\$ 2,5 mil millones; la semana siguiente, el Banco Bradesco anunció un beneficio superior, R\$ 2,6 mil millones. Veamos ahora las grandes empresas industriales. Para el mismo semestre, las ganancias de Vale do Río Doce (CVRD), se elevaron a R\$ 5,1 mil millones. La Petrobrás, “compañía estatal”, en realidad controlada por la bolsa (principalmente por los fondos de pensión norteamericanos) registró un lucro de R\$ 9,9 mil millones. La “renuncia fiscal” del estado federal, en beneficio de los empresarios, se incrementó 12% en 2005, llegando al registro histórico de R\$ 27 mil millones.

Agronegocio, Transgénicos y Comercio Exterior

Cabe esclarecer también cual es el sector que tiene la participación más expresiva en la producción agrícola del país. Ciertos especialistas (con apoyo de los grandes medios de comunicación) consiguen afirmar que no tiene sentido, dentro de la lógica económica, distribuir tierra, o sea, una política de la reforma agraria, porque el capitalismo en el campo ya habría logrado todos los progresos técnicos necesarios: una política de la reforma agraria podría desestabilizar al sector “competitivo” del campo, para dejarlo vulnerable. La “modernización conservadora” habría transformado a los grandes propietarios de tierra, que ahora producirían de manera moderna y eficiente, lo que habría puesto a los latifundios en el sector de las propiedades productivas: con ese mito se pretendió continuar garantizando que 132 millones de hectáreas sigan en manos de poco más de 32 mil terratenientes.

Los datos de IBGE respecto al censo agrícola de 1995/6, demuestran que las unidades pequeñas son las que producen la gran mayoría de los productos del campo. Del total del personal empleado en los establecimientos (17,9 millones de trabajadores) las unidades pequeñas usaron 87,3%, las medias 10,2 %, y las grandes solamente 2,5 %. El latifundio esconde la tierra improductiva. En realidad, el papel de la gran propiedad en el país, fue siempre el de servir de reserva patrimonial.¹²

Por otro lado, el agronegocio tiene un límite muy preciso, la política agrícola proteccionista practicada por los EEUU y la UE. Si bien los

Estados Unidos afirman estar dispuestos a eliminar barreras tarifarias, lo cierto es que la Ley de Inversión y Seguridad Agrícola del 2002, sometida por el Presidente Bush, y aprobada por el Congreso de los EEUU, contiene un gasto de 20 billones de dólares anuales en subsidios para la agricultura norteamericana, e introduce elementos tales como el enlace entre subsidios y producción agrícola, lo cual promueve un incremento en la oferta del producto agrícola y lo prepara a inundar los mercados internacionales. De igual manera, coloca el peso del apoyo a la agricultura en los contribuyentes y no en el mercado: los exportadores del llamado *agrobusiness*, tales como Cargill y Archer Daniels, tienen acceso a dichos productos a un precio muy por debajo de los costos de producción. En otras palabras, no solamente se benefician los agricultores norteamericanos, sino también los intermediarios que venden en las áreas periféricas.

Al ser confrontado Robert Zoellick, principal representante comercial norteamericano, con las contradicciones de la política republicana en relación al sector agrícola, éste se limitó a responder que “los Estados Unidos están comprometidos a eliminar subsidios y a cortar tarifas siempre y cuando otros hicieran lo mismo y dejando claro que no se eliminarían los beneficios de la Ley Agrícola”.

Con el acuerdo Brasil – EEUU para la implantación, en los períodos previstos, del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) se abrieron las puertas para un plan de la colonización económica (y política) de América Latina por los Estados Unidos. Contrariamente a las apariencias, América Latina tiene una importancia estratégica para los EEUU. Entre 1990 y 1997, América Latina era el mercado más dinámico para los Estados Unidos, al recibir 20 % de las exportaciones estadounidenses, mientras que Japón y Asia oriental recibían 25 % conjuntamente. Esto permitió, a los EEUU, absorber una parte importante de su déficit comercial con Japón y Europa.

En América Latina, por otro lado, se encuentran 40 % de todos los animales y especies vegetales existentes en el planeta, en otras palabras, casi la mitad de la biodiversidad mundial. Eso es un elemento fundamental cuando se desarrolla una competencia despiadada para descifrar el código genético de las especies, con vistas a las aplicaciones comerciales de la genética. Los grandes laboratorios de los Estados Unidos y de Europa están patentando los códigos genéticos, y por eso los Estados Unidos ponen tanto énfasis en la defensa de la “propiedad intelectual.” Los laboratorios descifran los códigos genéticos, después los patentan, introducen los transgénicos masivamente, por ejemplo, en la agricultura, y pronto cobran de los agricultores y de los países periféricos por el uso de las patentes así obtenidas. Los Estados Unidos tienen 40 % de los gastos mundiales de investigación, y tienen superavit de varios millones de dólares gracias a ese concepto. La propiedad intelectual es especialmente costosa para los países de bajo y medio ingreso, especialmente en áreas tan sensibles como la salud, cuando se impone la propiedad intelectual sobre las fórmulas de medicinas, por décadas, para males como el HIV, el cáncer, la hepatitis, entre otros; también sobre la alimentación,

¹²Oliveira, Arioaldo Umbelino. *Os Mitos sobre o Agronegócio no Brasil*. Documento presentado en el XII Encuentro Nacional do MST, São Miguel do Iguçu, de 19 a 24 de enero de 2004.

con las patentes de semillas y agroquímicos (Monsanto posee 91 % de las patentes de las semillas de soja).

No fue simple coincidencia el hecho de que, al mismo tiempo en que Lula dijo “sí” al calendario del ALCA, una reunión ministerial de la OMC en Egipto verificó la crisis del *round* de las negociaciones agrícolas. El llamado “Round de Doha” tiene como eje la apertura del mercado agrícola de los países centrales, a cambio de hacer más profunda la apertura del mercado de servicios de los países periféricos. Su presupuesto era que la apertura del mercado agrícola de Europa para la exportación estadounidense pudiese compensar la entrada de productos agrícolas brasileños en los Estados Unidos. Pero la UE no consigue eliminar sus compromisos de US\$ 50 mil millones de subsidios a sus agricultores: el gobierno francés no estaría dispuesto a enfrentar la movilización de los agricultores de su país.

La intención de la apertura del mercado agrícola está clara en el contrato que preve la normalización de las llamadas normas higiénicas, que se haría de manera de incrementar la exportación de los productores agrícolas brasileños. Las declaraciones en Washington de Lula eran categóricas, cuando afirmaba que el Mercosur y la integración sudamericana podían convertirse en una buena alternativa para las compañías estadounidenses.

De la mano del agronegocio, Brasil entró de lleno en el cultivo de transgénicos. Es un mercado de 21 mil millones dólares a nivel mundial, que puede ser manipulado de acuerdo con la voluntad de sus accionistas mayoritarios, sin la incumbencia de garantizar la alimentación en el mundo entero. Sus industrias principales son Monsanto, Dupont (ambas de origen norteamericano) y, ahora también, la Syngenta, de Suiza.¹³ Esas compañías implantaron los transgénicos en todo el mundo, a pesar de la falta de aprobación pública. En 1996, el comercio de transgénicos llegó a 280 millones dólares, y en 2004 pasó a 4,7 mil millones dólares, un aumento de 17 veces en nueve años. Brasil ya es el tercer productor del mundo de organismos modificados, sólo perdiendo para los Estados Unidos y Argentina.

Con el crecimiento de la venta de las semillas, también se incrementó el uso de pesticidas. El uso de pesticidas sobre plantaciones transgénicas crece todos los años: desde 1996, el aumento era de 4,1%. En Brasil, la disputa de espacios para cultivo de transgénicos se hizo evidente con la presencia de Syngenta en el estado de Paraná: en marzo de 2006 fue multada por Ibama (instituto brasileño del ambiente y de los recursos naturales renovables) en R\$ 1 millón, por practicar experimentación y plantación de soja y transgénicos de maíz en la zona protegida del Parque Nacional de Iguazu. Se trata de una unidad de protección del medio ambiente.

¹³Syngenta es responsable por la más grande contaminación genética ilegal demostrada en el mundo entero. Durante cuatro años, la compañía comercializó el maíz de la variedad Bt10, que tenía su comercialización prohibida, como siendo Bt11, autorizado para la circulación, contaminando el maíz exportado hacia algunos países.

De acuerdo con la ley de bioseguridad de 2005, la plantación es prohibida “en las áreas de unidades de protección del medio ambiente y las áreas respectivas de la reducción, en las tierras autóctonas, en las áreas de protección de manantiales de agua potencialmente utilizable para el público, y en las áreas declaradas como prioridad para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad”. Para el MST, “las semillas son históricamente las bases de la supervivencia humana y no pueden ser artículos sometidos al mercado, sino un patrimonio de la humanidad”.¹⁴

En la “cumbre mundial contra el hambre” realizada en Roma a mediados de 2002, los 4.000 delegados convocados por la FAO (la organización alimentaria mundial, dependiente de la ONU) constataron el incumplimiento de los planes votados en la “cumbre” anterior, en 1996, tendientes a reducir a la mitad el número de personas desnutridas en el 2015. Este objetivo fue pospuesto para 2035. En el mundo hay 850 millones de personas cuya ración alimentaria diaria es inferior a las 2.400 calorías, el mínimo de subsistencia. Aunque algunos países lograron reducir sus índices de desnutrición, la situación de conjunto empeoró drásticamente, en especial en África, donde el número de hambrientos creció en 30 millones en la última década. Cada año mueren 8 millones de personas por desnutrición, la mayoría niños; el 70 por ciento de los hambrientos se concentra en las zonas rurales de los países atrasados. Los “líderes mundiales” no se hicieron ver en la “cumbre” de Roma.

A pesar del impasse, la FAO insistió en la política precedente: el documento aprobado afirmó que la solución al problema del hambre pasa por la liberación del comercio agrícola y de los flujos de capital. Según esa teoría, la “liberalización del comercio” permitiría a los países del Tercer Mundo colocar su producción agrícola en los países centrales; al mismo tiempo, la “liberalización de los flujos de capital” permitiría aumentar las inversiones en el sector agrícola de los países atrasados. Poco antes, la sobreproducción mundial de alimentos derrumbó los precios de los productos agrícolas, empobreciendo a los países productores. La caída del precio del café, del 65% entre 1997 y 2002, por ejemplo, empobreció a 25 millones de familias campesinas. Los subsidios a la agricultura en los Estados Unidos y la Unión Europea profundizan la depresión de los precios. Estados Unidos aprobó subsidios por valor de 190.000 millones de dólares para la primer década del siglo XXI, lo que sería otro golpe demoledor para millones de productores agrícolas en los países periféricos.

La eliminación de los subsidios agrícolas no resolvería el problema. El acceso a los mercados no es libre, sino que se encuentra monopolizado por un pequeño número de empresas que hegemonizan el comercio internacional. El mercado del café, por ejemplo, está en manos de cinco

¹⁴Responsable por 88 % de las semillas transgénicas producidas en el mundo entero, la compañía estadounidense Monsanto declaró un beneficio neto de 833 millones de dólares en los primeros meses del año fiscal de 2006. El resultado era 119,2 % superior al del mismo período del año pasado, con el ascenso de 18,6 % en el volumen de ventas totales.

grandes compañías internacionales; el número de las que monopolizan el comercio mundial de granos no es mayor. Los EEUU desarrollaron una importante movilización política para imponer en Roma la liberación del comercio mundial de granos genéticamente modificados, insistentemente reclamada por el gobierno norteamericano, con el respaldo de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Argentina.

La resolución aprobada en Roma estableció la “promoción de la utilización de la biotecnología y de las semillas genéticamente modificadas”, lo que significó un triunfo para el puñado de grandes laboratorios, como el norteamericano Monsanto o el alemán Bayer, que monopolizan la manipulación genética de alimentos. Como muestra Argentina, la utilización de semillas genéticamente modificadas (más resistentes a las inclemencias climáticas) y de agroquímicos, determina un endeudamiento creciente, que se transforma en quiebra económica cuando se produce la baja de los precios, provocada por la ampliación de una producción que no encuentra mercados; entre 1992 y 1999, años de gran aumento de la utilización de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos en el campo argentino, el número de pequeños y medianos productores rurales cayó de 170.000 a 116.000 en ese país.

Paralelamente a la “cumbre” oficial, un conjunto de ONGs organizó una reunión “alternativa”. Sus deliberaciones, como las oficiales, fueron abiertas por el director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf. Las ONGs opusieron a los “planes inoperantes” de la FAO, el concepto de “soberanía alimentaria”, que se concentra en “priorizar la producción alimentaria para los mercados locales”. Esto podría servir a los granjeros europeos o norteamericanos, pero de ninguna manera a los campesinos y los pueblos de América Latina o de África.¹⁵ ¿Cómo podría la agricultura de subsistencia africana garantizar la alimentación de sus propios pueblos? ¿Con qué recursos podrían desarrollar la producción agrícola los campesinos latinoamericanos?

Perspectivas inmediatas, perspectivas históricas

En la Amazonia, o más precisamente en la región norte de Brasil, fueron asentadas 40% del total de familias, porque allí está la mayor cantidad de tierras públicas. Para obtener tierras en las regiones más desarrolladas del país, como el sur, sería necesario actualizar el índice de productividad que define si una propiedad es improductiva y puede ser expropiada para fines de reforma agraria, de acuerdo a la Constitución. El índice usado data de 1975, cuando se consideraba productiva una hacienda con medio vacuno por hectárea. Ahora, las nuevas tecnologías permiten criar tres o cuatro reses en una hectárea y producir casi el doble de soja u otros granos. Según el gobierno de Lula, los créditos agrarios concedidos pasaron de 2.300 millones de reales (mil millones de dólares) en 2002 a 9.000 millones de reales (3.900 millones de dólares) en 2003.

¹⁵Oviedo, Luis. Crise alimentária e biotecnología. *IV Internacional*, San Pablo, agosto de 2002.

En abril de 2005, Lula prometió editar un decreto que actualizaría todos los índices de productividad usado por técnicos de INCRA para verificar si una propiedad rural es o no improductiva. Con los nuevos índices, el número de áreas consideradas improductivas crecería, lo que también incrementaría la cantidad de propiedades para el establecimiento de campesinos sin tierras. El balance de la reforma agraria de Lula, sin embargo, es el peor posible, muy por detrás del “neoliberalismo” de FHC: en 2003, sólo fueron asentadas 14 mil familias; en 2004, no llegaron a 50 mil (la propuesta inicial del gobierno, recordémoslo, era de asentar 430 mil familias bajo su mandato). La meta para 2005 era de 115 mil familias: sólo fueron asentadas poco menos de 27 mil. Y 2005 comenzó con el corte de R\$ 2 mil millones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario (de un total de R\$ 3,4 mil millones previstos, o sea, fue cortado más del 50% de los recursos previstos).

2005, también, concluyó con la salida del principal representante del agronegocio en el gobierno de Lula, Roberto Rodrigues, substituido por Guedes Pinto. Con Guedes en el comando, la expectativa era que la agricultura familiar fuese tratada como el sector capitalista, con las mismas prioridades para investigaciones en Embrapa y en las negociaciones del comercio externo. Rodrigues estaba en el gobierno de Lula desde el principio, y había manifestado su insatisfacción con la política económica del gobierno federal por la falta del sostén del gobierno para por lo menos minimizar la crisis que vivía la agricultura, debido a la caída del dólar - que reduce la competitividad de las exportaciones brasileñas - y a la sequía en el sur.

Al mismo tiempo en que rechaza modificar el tipo de cambio, y deprecia el real, el gobierno anunció en 2006 un “paquete de medidas” que podría alcanzar R\$ 75 mil millones en ayuda a los productores rurales. El valor incluye R\$ 50 mil millones en crédito para la nueva cosecha, y R\$ 10 mil millones para la agricultura familiar, además de la renegociación y extensión de las deudas ya contraídas por los agricultores. El “paquete” fue considerado tímido por los ruralistas, que también defendieron la desvalorización de la moneda, la reducción de los intereses bancarios y más renegociación de las deudas agrarias.

Además del abandono de la reforma agraria, 2006 fue testigo del escándalo del ITR (Impuesto Territorial Rural). A lo largo de cuarenta años, algunos gobiernos trataron de activar ese impuesto. El gobierno de FHC probó estadalizarlo: su ministro Raul Jungmann cambió los criterios del ITR, anunciando que el “nuevo” impuesto rural sería una revolución agraria, usado como instrumento de la corrección de la concentración de la propiedad agraria. Pero no había cualquier mecanismo de castigo a los propietarios que no pagaban, o mintieran en las declaraciones. Como consecuencia de esa política, el gobierno recolectó sólo R\$ 280 millones de ITR durante 2004, lo que es igual a la carga tributaria urbana (IPTU) de sólo un barrio de la ciudad de São Paulo. Por las normas en curso, las propiedades pequeñas están exentas del pago de ITR. Quedan 270 mil propietarios medianos y grandes, que controlan 298 millones de hectáreas, que pagan en concepto de ITR menos de un

real (R\$ 1,00) por hectárea, por año, lo que no es, evidentemente, un correctivo de la concentración de la propiedad de la tierra.

¿Qué hizo el gobierno de Lula ante esa situación? Podría seguir la ley: incrementar el ITR por hectárea; incrementarlo progresivamente, año a año; pagar las expropiaciones sólo por el valor declarado por el terrateniente, destinando esos recursos para la reforma agraria, o varias otras opciones intermediarias. El gobierno de Lula hizo lo que ningún otro gobierno osara: municipalizó la colecta y el destino del ITR. En el último día del año de 2005, para entrar ya en el año fiscal de 2006, el presidente Lula promulgó la nueva ley del ITR, que con eso dejaba de ser un impuesto para la reforma agraria. Ahora pasa a ser un impuesto a ser colectado, supervisado y recaudado por los ayuntamientos municipales, que puede usar el dinero de acuerdo con su propia voluntad. Los terratenientes reaccionaron eufóricos ante la medida, ya pagaban poco y, ahora sería suficiente llegar a un acuerdo con su amigo alcalde para pagar todavía menos.

Hacia el final del 2005, el MST emitió un balance de la reforma agraria bajo el gobierno de Lula:

“Acreditamos que a vitória do governo Lula representava uma alteração na correlação de forças e favoreceria a Reforma Agrária. (...) Passados dois anos e meio, constatamos que a Reforma Agrária caminha a passos de tartaruga. O governo foi incapaz de implementar seu próprio plano. Faltou coragem para enfrentar os empecilhos da Reforma Agrária, que não anda porque: a) se mantém um estado administrativamente organizado contra os pobres, para atender apenas aos ricos; b) o governo acreditou na falsa idéia que o agronegócio seria a solução para a pobreza no campo. Mas ele beneficia apenas os exportadores e as transnacionais agrícolas; c) o governo não percebeu que a manutenção de uma política econômica neoliberal impede a realização de qualquer programa de Reforma Agrária. A política neoliberal corta recursos orçamentários, concentra renda, prioriza exportações e desemprega. A política que defendemos distribui renda, gera empregos, desenvolve o mercado interno e fixa o homem no meio rural. E a Reforma Agrária é apenas instrumento dessa política... Descontentes, fizemos a Marcha Nacional. Durante 17 dias reunimos 12 mil caminantes em torno do mesmo objetivo. Conseguimos fazer o governo renovar conosco sete compromissos com o objetivo de acelerar a Reforma Agrária. Pouco aconteceu. O comprometimento de assentar 115 mil famílias este ano resumiu-se, até agora, a aproximadamente 20 mil. Outras 120 mil famílias continuam acampadas, esperando em condições sub humanas. A prometida portaria que altera os índices de produtividade para cálculo das desapropriações não foi publicada até agora. Trata-se de um simples ato administrativo de dois ministros. Estamos cansados de ouvir governantes falar em falta de recursos, enquanto os bancos nadam em bilhões de reais transferidos pelo estado. O governo Lula tem uma dívida imensa com os sem-terra e com a sociedade brasileira no quesito Reforma Agrária!”¹⁶

A mediados de 2006, una fortuna de más de R\$ 75 mil millones de recursos públicos fueron cedidos al agronegocio en una operación del

estado federal. Era el tercer “paquete” oficial de la ayuda a los propietarios rurales del agronegócio, en menos de 12 meses. Esos tres paquetes de “generosidad para con los ruralistas” equivalen a aproximadamente US\$ 45 mil millones (al cambio de R\$ 2,25 por dólar): aproximadamente, también, 5 % del producto bruto interno (PIB). Otra comparación, que da una idea más exacta: el gobierno brasileño paga un volumen de aproximadamente R\$ 160 mil millones anualmente por la deuda pública, o US\$ 71 mil millones, o, todavía, 8,30 % del PIB. Los paquetes de “generosidad para los ruralistas” no están muy detrás de lo que extrae el sector financiero de los cofres públicos. Para cubrir esos hoyos gigantes provocados por el agronegocio, el gobierno tiene que incrementar la deuda pública, la tasa de interés, los intereses pagados anualmente, valorar el cambio, etc.

El gran equívoco de los agricultores brasileños fue elaborar la teoría de que la agricultura capitalista era capaz de competir en el plano mundial, con la posibilidad de ganar esa competencia. La producción de mundo de soja en el 2004/2005 fue de 213 millones de toneladas. La producción mundial de maíz, es decir el cereal competitivo de la soja, porque está también destinado en su mayor parte hacia la producción de ración, fue de 400 millones de toneladas. En los Estados Unidos, lo que más se produce es maíz, no la soja, que equivale a un quinto de la producción de maíz. Allí, la productividad del maíz está entre 9 y 10 toneladas por hectárea. En Brasil, ella está entre 2 y 3 toneladas por hectárea. En realidad, la agricultura brasileña no tiene reales condiciones de competir en el mercado mundial.

¿En qué situación real se encuentra la *coqueluche* agraria del gobierno brasileño? El corazón de la agricultura-empresa está en crisis. Mato Grosso, el símbolo de la competitividad de las exportaciones brasileñas, debe reducir su producción de granos y algodón en 30 % a 40 % en este año, de acuerdo con los cálculos aproximados de entidades del sector. Ese estado es el más grande productor de soja, algodón y bovino de Brasil, el segundo en arroz, y gran productor también de maíz y sorgo. En la cuna de casi 10 % de la producción de cereales del país, la situación es melancólica. Los distritos municipales en que la prosperidad era ejemplo están con la colecta impositiva cayendo 15%. Ciudades que ya tenían pleno empleo están con 12% de desempleados... Debe haber una reducción de 50% de la área plantada de la zona. El comercio también se ve afectado; en algunos municipios matogrossenses el movimiento cayó 40%.

Con la crisis, un tercio de los cheques están sin fondos. Homero Alves, presidente de la federación de agricultura y ganadería del estado federal de Mato Grosso, dice que “en 2005, fuimos el último estado federal en generación de empleo, dejamos el cielo y fuimos al infierno”.¹⁷ El saqueo de los cofres públicos aumenta la vulnerabilidad de la economía y la pobreza social, y tiene el único objetivo de librar de deudas particulares a los “empresarios modernos”, para empezar todo otra vez: más

¹⁶Posições políticas do MST nessa conjuntura. MST nº 96, 9 de agosto de 2005.

¹⁷O Estado de S. Paulo, 30 de abril de 2006.

crédito fácil, más deudas, más exportación, más exceso de producción, nueva crisis...¹⁸ El “paquete” agrícola de 2006 fue elaborado cuando se constató que casi 55% de la cosecha de soja de 2006 no conseguía ser comercializada, o sea, cuando se constató una enorme sobreproducción. Para no hundir las finanzas públicas (y su propio gobierno, en vísperas de elecciones generales) el gobierno de Lula determinó que el subsidio a la soja (diferencia entre el precio de mercado y los contratos) sea pagado en 2007... por el próximo gobierno.¹⁹

La situación normal del mercado de cereales es la caída relativa de los precios, la agricultura es entonces mantenida con políticas que le garantizan subsidios. Y eso afecta tanto a los pequeños productores como a los grandes; la producción de soja, sobre todo en la área del sur de Brasil, proviene en su mayor parte de las propiedades pequeñas. Las unidades con menos que 200 hectáreas producen aproximadamente de 30% a 35% del volumen total de la producción de soja. En Brasil, la liberalización comercial y la política cambial promovieron una fuerte transformación de los precios relativos: “La característica radical de esos movimientos de precios, sumada a la reducción del programa de crédito oficial, discrimina fuertemente a los productores de tecnología tradicional y de escasa talla, concediéndoles pocas chances de sobrevivencia”.²⁰

El segundo gobierno de Lula debe hacer frente a los desequilibrios que ha dejado el primer mandato, como una deuda pública que sigue pagando elevados intereses; un fuerte sector ganadero en quiebra, por su alto endeudamiento y un tipo de cambio desfavorable; y, más importante, por la tendencia de la industria a reducir costos con despidos masivos, flexibilización laboral, trabajo en negro y nuevas reformas contra los derechos laborales y previsionales. Las elecciones de 2006, con su inesperada segunda vuelta, han desatado un inicio de crisis política en Brasil y en el plano internacional. Ha quedado en cuestión el Mercosur, en lo que se refiere al interés de la industria paulista de entrar al mercado norteamericano por medio de tratados comerciales. La relación de las masas populares, especialmente campesinas, con el próximo gobierno, cualquiera sea, no serán las de los cuatro años recientes. El coloso obrero y campesino de Brasil hará sentir su peso.

Los campesinos sin tierra acampados ya suman un millón: la cantidad de familias bajo tiendas de lona subió de 60 mil, en 2002, hasta 230 mil, en 2006.²¹ La violencia agraria continua, y de acuerdo con la CPT, 93% de los crímenes no son siquiera llevados a juicio. Entre 1985 y 2004

¹⁸MARTINS, José. O agronegócio assalta os cofres públicos. *Criticas da Economia Política* n° 16 e 17, San Pablo, 1ª e 2ª semanas de junio de 2006.

¹⁹D'AMORIM, Sheila. Conta de pacote agrícola fica para 2007. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 13 de mayo de 2006.

²⁰SILVA DIAS, Guilherme Leite, e AMARAL, Cicely Moitinho. Mudanças estruturais na agricultura brasileira 1980-1998. *Desarrollo Productivo* n° 99, Santiago de Chile, CEPAL-ECLAC, enero de 2001.

²¹SCOLESE, Eduardo. Sem-terra acampados já somam um milhão sob Lula. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 29 de mayo de 2006.

hubo 1.400 asesinatos de campesinos sin tierra.²² Hay un promedio de 41 trabajadores agrarios muertos por año. La crisis agraria en Brasil es a la vez económica (sobreproducción y baja productividad en términos mundiales) y social (falta de acceso a la tierra de la enorme masa campesina): como una bomba de tiempo, ella condiciona las perspectivas del próximo gobierno. La explosión de esa bomba pondrá sobre el tapete de la historia todos los problemas irresueltos de la constitución democrática de la nación brasileña, en condiciones históricas y sociales (de clase) inexistentes en el pasado.

²²*Folha de S. Paulo*, 16 de abril de 2006.